

Lumbreras, contra resolución del Ministerio de Defensa de veintinueve de junio de mil novecientos setenta y nueve y once de enero de mil novecientos ochenta, las que declaramos conformes a derecho, y no hacemos expresa imposición de costas. Así por esta nuestra sentencia lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

16544 ORDEN 111/01070/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 2 de diciembre de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Manuel Masero Bonilla, Sargento de la Guardia Civil, Caballero Mutilado Permanente.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Manuel Masero Bonilla, Sargento de la Guardia Civil, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 27 de julio y 14 de noviembre de 1978, se ha dictado sentencia, con fecha 2 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado señor Sans Sans, en nombre y representación de don Manuel Masero Bonilla, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de veintisiete de julio y catorce de noviembre de mil novecientos setenta y ocho, que declaramos conformes en derecho, sin expresa imposición de costas.

Así por esta nuestra sentencia de la que se unirá testimonio al rollo, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

16545 ORDEN 111/01071/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Territorial de Oviedo, dictada con fecha 29 de marzo de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Eduardo Fernández Rodríguez y 12 más, Caballeros Mutilados de Guerra por la Patria.

Excmos. Sres.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Territorial de Oviedo, entre partes, de una, como demandante, don Eduardo Fernández Rodríguez y doce más, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra Resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa de 12 de agosto y 30 de noviembre de 1981, se ha dictado sentencia, con fecha 29 de marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando el presente recurso contencioso-administrativo, interpuesto por don Eduardo Fernández Rodríguez, don Luis Villalvilla Curiel, don Rubén Dahan Morely, don José María Díaz Fernández, don Abilio Gutiérrez Fernández, don Julio Dacosta Ferreiro, don José Jovino García Quintana, don Ayus Dahan Morely, don Carlos Alaguero Calabrés, don Fernando Alvarez Suárez, don Domingo de la Arada Juárez, don José Paulino Fernández Muñoz y don Angel Sánchez Rosado, contra Resoluciones de la Subsecretaría del Ministerio de Defensa (Secretaría General para Asuntos de Personal y Acción Social), de fechas doce de agosto y treinta de noviembre de

mil novecientos ochenta y uno, representada por el señor Abogado del Estado, Resoluciones que debemos confirmar y confirmamos, por estar ajustadas a derecho, sin hacer declaración de las costas procesales.

Así por esta nuestra sentencia, de la que se unirá certificación a los autos, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956 y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a VV. EE.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmos. Sres. Subsecretario de Política de Defensa, y General Director de Mutilados de Guerra por la Patria.

16546 ORDEN 111/10077/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 27 de enero de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Leandro Carrasco Lemus, Teniente Coronel de Ingenieros del Ejército de Tierra.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Leandro Carrasco Lemus, Teniente Coronel de Ingenieros, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 5 de diciembre de 1978 y 12 de febrero de 1979, se ha dictado sentencia, con fecha 27 de enero de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don Leandro Carrasco Lemus contra resoluciones del Ministerio de Defensa de cinco de diciembre de mil novecientos setenta y ocho y doce de febrero de mil novecientos setenta y nueve, que declaramos conforme a derecho; sin hacer condena en costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

16547 ORDEN 111/10078/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 30 de diciembre de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Joaquín Muñoz Quiroga, Capitán de Oficinas Militares.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Joaquín Muñoz Quiroga, Capitán de Oficinas Militares, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resoluciones del Ministerio de Defensa de 20 de julio y 6 de octubre de 1977, se ha dictado sentencia, con fecha 30 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Letrado don Jerónimo Esteban González, en nombre y representación de don Joaquín Muñoz Quiroga, contra las resoluciones del Ministerio de Defensa de veinte de julio y seis de octubre de mil novecientos setenta y siete, dictadas en el expediente administrativo a que se refiere estas actuaciones, resoluciones que anulamos por no ser conformes a derecho, y declaramos el derecho del recurrente a que se le conceda el empleo de Comandante honorario de Oficinas Militares, condenando a la Administración a estar y pasar por dicha declaración, y no hacemos expresa imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

16548 ORDEN 111/10079/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 17 de marzo de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Benigno Marquina Gallo, Comandante de Oficinas Militares, retirado.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Benigno Marquina Gallo, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar de 12 de diciembre de 1979 y 2 de febrero de 1980, se ha dictado sentencia, con fecha 17 de marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Benigno Marquina Gallo contra acuerdos del Consejo Supremo de Justicia Militar de doce de diciembre de mil novecientos setenta y nueve y veintisiete de febrero de mil novecientos ochenta, por los que, respectivamente, se determinó el haber pasivo del recurrente, y se confirmó en reposición el anterior, debemos declarar y declaramos no conformes a derecho y anulados dichos acuerdos en cuanto no se integró a base reguladora al dicho haber pasivo con trece trienios de Oficial, de proporcionalidad diez, debiendo efectuarse nuevo señalamiento en que se tenga en cuenta estos trienios, sin costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

16549 ORDEN 111/10080/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 7 de diciembre de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Félix Hidalgo Román, ex Capitán Capellán del Ejército.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Félix Hidalgo Román, ex Capitán Capellán, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra la Orden de 4 de julio de 1978 del Ministerio de Defensa, se ha dictado sentencia, con fecha 7 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso interpuesto por don Félix Hidalgo Román contra la Orden de cuatro de julio de mil novecientos setenta y ocho, del Ministerio de Defensa, que declaramos conforme a derecho; sin costas.

Así por esta nuestra sentencia —de la que se unirá certificación al rollo de la Sala—, la pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27

de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Jefe del Estado Mayor del Ejército (JEME).

16550 ORDEN 111/10081/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo dictada con fecha 9 de marzo de 1982 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Teófilo García Santodomingo, Teniente Coronel de Intendencia.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sala Quinta del Tribunal Supremo, entre partes, de una, como demandante, don Teófilo García Santodomingo, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de 28 de noviembre de 1979, se ha dictado sentencia, con fecha 9 de marzo de 1982, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, estimando el recurso interpuesto por don Teófilo García Santodomingo, Teniente Coronel retirado de Intendencia, contra los acuerdos de la Sala de Gobierno del Consejo Supremo de Justicia Militar de veintiocho de noviembre de mil novecientos setenta y nueve (O. C. de cinco de diciembre de mil novecientos setenta y nueve), veintiocho de marzo y tres de junio de mil novecientos ochenta —este último desestimatorio de la reposición del anterior—, debemos anular y anulamos como contrarios a derecho tales acuerdos y, en consecuencia, declaramos el derecho del actor a que le sea fijada nueva pensión, conforme a las bases explicadas en los considerandos de esta sentencia —cálculo del trienio de Alférez como de Oficial, en resumen pues, dos trienios de proporcionalidad seis y once trienios de proporcionalidad diez; y cálculo de la pensión sobre las retribuciones básicas vigentes en el año mil novecientos setenta y nueve con aumento del quince por ciento a partir del uno de enero de mil novecientos ochenta—, todo lo cual justifica el derecho del actor a disfrutar de una pensión de retiro por importe mensual de setenta y siete mil cuatrocientas sesenta y cuatro pesetas. No se hace expresa imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, que se publicará en el "Boletín Oficial del Estado" e insertará en la "Colección Legislativa", lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, de conformidad con lo establecido en la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 27 de diciembre de 1956, y en uso de las facultades que me confiere el artículo 3.º de la Orden del Ministerio de Defensa número 54/1982, de 16 de marzo, dispongo que se cumpla en sus propios términos la expresada sentencia.

Lo que comunico a V. E.

Dios guarde a V. E. muchos años.

Madrid, 21 de mayo de 1982.—P. D., el Secretario general para Asuntos de Personal y Acción Social, Miguel Martínez-Vara de Rey y Teus.

Excmo. Sr. Teniente General Presidente del Consejo Supremo de Justicia Militar.

16551 ORDEN 111/10082/1982, de 21 de mayo, por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional dictada con fecha 29 de diciembre de 1981 en el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aurelio Melchor Hernández, Capitán de Infantería.

Excmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo seguido en única instancia ante la Sección Tercera de la Audiencia Nacional, entre partes, de una, como demandante, don Aurelio Melchor Hernández, Capitán de Infantería, quien postula por sí mismo, y de otra, como demandada, la Administración Pública, representada y defendida por el Abogado del Estado, contra resolución del Ministerio de Defensa de 20 de septiembre de 1979, se ha dictado sentencia, con fecha 29 de diciembre de 1981, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Aurelio Melchor Hernández contra resolución del Ministerio de Defensa de veinte de septiembre de mil novecientos setenta y nueve, que declaramos conforme a derecho; sin expresa imposición de costas.

Así, por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»